

ECUADOR Debate₁₁₃

Quito/Ecuador/Agosto 2021

Desvanecimiento del Otro en la guerra de los discursos

Ecuador en la trampa de un futuro
pasadista

Conflictividad socio-política:
Marzo-Junio 2021

Cultura, política y guerras discursivas

Una nueva era: la guerra de los
discursos

Forma natural humana frente a la crisis
de identidad múltiple

La benévola negación del otro. Las
protestas en Colombia del 2021

“Una breve historia de los humanos”.
Pequeño ejercicio de traducción

Las instituciones políticas como
espacios terceros

La escuela un lugar para re-escribir los
enigmas de la vida

Pensar la transición de los territorios en
los Andes rurales del Ecuador

Postdemocracia, capital (i)legal y
extractivismo

La comunicación en los medios: una
lectura sociológica de la movilización
de octubre 2019 en Ecuador



ECUADOR **Debate**

CONSEJO EDITORIAL

Alberto Acosta, José Laso Ribadeneira, Simón Espinoza,
Fredy Rivera Vélez, Marco Romero, Hernán Ibarra, Rafael Guerrero

Director: Francisco Rhon Dávila. Director Ejecutivo del CAAP
Primer Director: José Sánchez Parga. 1982-1991
Editora: Lama Al Ibrahim
Asistente General: Margarita Guachamín

Ecuador Debate, es una revista especializada en ciencias sociales, fundada en 1982, que se publica de manera cuatrimestral por el Centro Andino de Acción Popular. Los artículos publicados son revisados y aprobados por la Dirección y los miembros del Comité Editorial. Las opiniones, comentarios y análisis son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente representan la opinión de *Ecuador Debate*. Se autoriza la reproducción total o parcial de nuestra información, siempre y cuando se cite expresamente como fuente: © **ECUADOR DEBATE. CAAP.**

SUSCRIPCIONES

Valor anual, tres números:

EXTERIOR: US\$. 51

ECUADOR: US\$. 21

EJEMPLAR SUELTO EXTERIOR: US\$. 17

EJEMPLAR SUELTO ECUADOR: US\$. 7

ECUADOR DEBATE

Apartado Aéreo 17-15-173B, Quito-Ecuador

Tel: 2522763 - 2523262

E-mail: caaporg.ec@uio.satnet.net - www.caapecuador.org

Redacción: Diego Martín de Utreras N28-43 y Selva Alegre, Quito

PORTADA

Gisela Calderón/Magenta

DIAGRAMACIÓN

David Paredes

IMPRESIÓN

TECNIGRAF

ISSN: 2528-7761



ECUADOR DEBATE 113

Quito, Ecuador • Agosto 2021
ISSN 2528-7761

PRESENTACIÓN. 3-8

COYUNTURA

Ecuador en la trampa de un futuro pasadista 9-34

Alberto Acosta

Conflictividad socio-política 35-44

Marzo-Junio 2021

TEMA CENTRAL

Cultura, política y enfrentamientos discursivos
(desde la Colonia hasta la actualidad).

Una lectura lacaniana 45-62

Marie-Astrid Dupret

Una nueva era: la guerra de los discursos 63-72

Alfredo Jerusalinsky

Forma natural humana frente a la crisis de identidad múltiple,
en la época de la degradación civilizatoria

73-95

Jorge Veraza Urtuzuástegui

La benévola negación del otro.

Las protestas en Colombia del 2021, como continuación
de procesos históricos de legitimación de la violencia

97-125

Andrés Ortiz Lemos y Carlos Sarango Reyes

“Una breve historia de los humanos”. Pequeño ejercicio de traducción	127-135
<i>Anne-Christine Taylor</i>	
Las instituciones políticas como espacios terceros: una mirada más allá de la ciencia política	137-149
<i>Pablo Medina P.</i>	
La escuela un lugar para re-escribir los enigmas de la vida	151-168
<i>María Isabel Miranda-Orrego e Isaac Grijalva Alvear</i>	

DEBATE AGRARIO

Pensar la transición de los territorios en los Andes rurales del Ecuador	169-199
<i>Nasser Rebai</i>	

ANÁLISIS

Postdemocracia, capital (i)legal y extractivismo	201-218
<i>Iván Roa Ovalle</i>	
La comunicación en los medios: una lectura sociológica de la cobertura periodística en la movilización de octubre 2019 en Ecuador	219-235
<i>Jonathan Luna Jaque</i>	

RESEÑAS

Presidentes empresarios y Estados capturados: América Latina en el siglo XXI	237-241
<i>Miguel Ruiz Acosta</i>	
Patrimonios alimentarios en América Latina. Recursos locales, actores y globalización	243-248
<i>Juan Martínez Borrero</i>	

La benévola negación del otro. Las protestas en Colombia del 2021, como continuación de procesos históricos de legitimación de la violencia

Andrés Ortiz Lemos* Carlos Sarango Reyes**

Los discursos que legitiman los desbordes violentos en el paro de Colombia 2021, parecen ser una continuación de las estrategias intelectuales para justificar las acciones de los grupos irregulares durante el último conflicto armado en ese país. Este artículo, analiza los principales marcos y maniobras discursivas empleadas por empresas ideológicas (intelectuales, comunicadores, líderes sociales, ONG, y líderes políticos), para justificar la violencia hacia víctimas civiles, a quienes definimos como “el otro”, primero en el conflicto armado colombiano y actualmente en el paro de 2021; concluyendo que las últimas son una derivación y una continuación de las primeras.

Introducción

Las protestas iniciadas a finales de abril, y extendidas durante más de dos meses, en distintas ciudades de Colombia, han sido interpretadas por varias industrias ideológicas, (intelectuales, comunicadores, líderes sociales y políticos), desde una serie de marcos y estrategias discursivas. El presente artículo, pretende identificar las disertaciones que justifican la violencia hacia personas que no tuvieron responsabilidad con los conflictos, a quienes aquí identificamos como “el pequeño otro” siguiendo a Lacan (1997). Se busca conocer si existe relación entre los discursos que legitiman la negación del “otro”, en el mencionado paro, con intentos similares de justificación de la violencia, venidos del ámbito intelectual, en diferentes eventos de la historia colombiana donde hubo afectación de civiles; particularmente en el conflicto armado entre las fuerzas de seguridad del Estado y la guerrilla. Para tal efecto, se realizará una aproximación a los discursos de las industrias ideológicas con respecto al conflicto armado colombiano, desde los aportes de Garzón y Agudelo (2019), quienes identifican tres lugares comunes, generalmente usados por los intelectuales para legitimar la violencia de los grupos guerrilleros.

* Doctor en Estudios Políticos (FLACSO-Ecuador); Profesor, Universidad Central del Ecuador.

** Estudiante Carrera de Ciencias Políticas, Universidad Central del Ecuador.

En segundo lugar, se propone un análisis de marcos discursivos emitidos en el contexto del paro de Colombia de 2021, desde tres grupos de emisores: primero, una aproximación a los titulares de dos de los medios más significativos y visitados en el ámbito virtual, en la región: La cadena *teleSUR*, y la Revista *Semana*. En tercer lugar, se han revisado los enunciados escritos por cuatro de los articulistas más leídos a nivel nacional, dos a favor de las tesis sostenidas por los manifestantes: María Jimena Duzán (*El Espectador*, *El Tiempo*, *El País*) y Antonio Caballero (*Los Danieles*); y dos articulistas críticos a las mismas: Salud Hernández (*Semana*) y María Isabel Rueda (*El Tiempo*). Posteriormente, se revisaron los discursos, declaraciones y propuestas de cuatro legisladores colombianos, dos a favor de los objetivos del paro: Gustavo Bolívar e Iván Cepeda; y dos críticos a los mismos: María Fernanda Cabal y Ernesto Macías Tovar. Finalmente, se analiza el discurso de los dos líderes políticos más representativos de Colombia, con posiciones confrontadas en torno al paro: el expresidente Álvaro Uribe, y el senador Gustavo Petro.

El artículo concluye con algunas premisas evidenciando como, las industrias ideológicas utilizan recursos, marcos y lugares comunes similares para justificar la negación de los “otros”.

¿Naturalización de la violencia en la cultura política colombiana?

Colombia tiene una tradición de conflicto y guerra interna, mayor a la de todos los países de la región, situación que empezó mucho antes del advenimiento de los movimientos guerrilleros, y que se remonta a los inicios de las instituciones republicanas.

El establecimiento de un sistema de partidos en el siglo XIX, no solo que no instituyó estabilidad política plena, sino que, el país atravesó alrededor de nueve guerras civiles (Giraldo, et al., 2019), donde los partidos políticos se enfrentaron unos a otros en cincuenta y cuatro conflictos: dieciséis entre liberales y conservadores, y treinta ocho entre liberales moderados y liberales radicales (CIDOB, 2019). La violencia ha estado ligada a la cultura política colombiana, como una de las más comunes formas de relacionamiento entre representantes de discursos divergentes (Ríos, 2021; Cubides, 2014; Mejía, 2010; Velásquez, 2005).

Varios de los intentos por establecer escenarios institucionales, para terminar con la violencia no solo que no tuvieron el éxito esperado, sino que incluso llegaron a ser usados como justificativo para nuevos conflictos; uno de los ejemplos más

notables fue el período del Frente Nacional.¹ Sus acuerdos fueron considerados excluyentes (a pesar de haberse confirmado en sufragio), por varios sectores emergentes que eventualmente iniciaron un nuevo período de lucha armada. El último conflicto colombiano, es decir aquel que involucró a las guerrillas,² a las fuerzas de seguridad del Estado, y a los grupos paramilitares,³ suele encontrar su justificativo, entre otras razones, en la supuesta exclusión política del mencionado período.

Durante el conflicto armado, se crearon condiciones cercanas a las que algunos denominaron “Estado fallido” (si bien esta idea se encuentra en medio de disputas), facilitando aún más el negocio del tráfico de cocaína (Tokatlian, 2008).

Según Barcelona Centre for International Affairs:

En la década de 1990, Colombia se convirtió en el primer productor de hoja de coca del planeta y pasó a controlar también el cultivo. Las FARC-EP acogieron gran parte de las hectáreas de cultivo, pasando a controlar 150 mil hectáreas de las dos millones localizadas en la selva del sur del país (CIBOD, 2019).

Como se mencionó anteriormente, de todos los grupos irregulares, los que mayores beneficios obtuvieron del narcotráfico, fueron las FARC; así por ejemplo: “en 1993 los ingresos de las FARC provenientes de la venta de la cocaína fueron de USD 92,6 millones, y USD 11,5 millones por la venta de heroína. Desde aquel momento, y hasta los primeros años del siglo XXI, las FARC fueron el mayor exportador de cocaína en Colombia” (Henderson, 2012: 212).⁴

Por causa de la disponibilidad de fuentes de financiamiento relacionadas con el crimen organizado, su complejidad y las disputas políticas en torno suyo, el

- 1 Durante el período de 1958-1974, el Frente Nacional fue un intento de apaciguar los enfrentamientos entre el partido conservador y el liberal, con el fin de generar una estabilidad democrática y de gobernabilidad.
- 2 Los principales protagonistas del último conflicto armado colombiano fueron: las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), de orientación marxista, fundadas en 1964 a partir de las “autodefensas campesinas liberales”; el Ejército de Liberación Nacional de Colombia (ELN) 1965, inspirado en la Revolución cubana y la Teología de la Liberación; y otros grupos de menor alcance como el Ejército Popular de Liberación Nacional (EPL), y el Movimiento 19 de abril (M-19). Todos ellos conforman aquello que puede definirse como “guerrilla”.
- 3 Durante los ochentas se crearon ejércitos privados auspiciados por hacendados, empresarios y narcotraficantes, para disputar los territorios a los grupos insurgentes. Los grupos paramilitares tuvieron su auge en 1997, cuando se crean las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), las cuales actuaron hasta el proceso de desmovilización propuesto por el expresidente Álvaro Uribe en 2006; a partir de entonces, sus cabecillas fueron extraditados a los Estados Unidos, bajo cargos de narcotráfico y terrorismo.
- 4 Citado por Garzón y Agudelo (2019).

conflicto armado en Colombia ha sido uno de los más largos y difíciles de la historia contemporánea, sobresaliendo por la brutalidad con la que trató a sus numerosas víctimas (Ugarriza, 2012; Rincón, 2010; Galtung, 2003).

Según los datos del informe “Basta Ya”, entre 1958 y 2012 más de 218.094 personas perdieron la vida como consecuencia directa de la guerra interna, el 81% eran civiles (GMH, 2013). Entre 1970 y 2010 alrededor de 27.023 personas fueron secuestradas, siendo las guerrillas de orientación marxista responsables del 90,6% de los casos. Entre 1981 y 2021 existieron 23.161 víctimas de asesinatos selectivos, el 38% ejecutado por grupos paramilitares, el 10,1% por la fuerza pública, mientras que el 44,5% tuvo como responsables a los grupos armados irregulares. Entre 1988 y 2012 ocurrieron 5.138 ataques a bienes civiles, el 85,1% por parte de las guerrillas. De 1988 a 2012 se registraron 95 actos de terrorismo, con 1.566 víctimas civiles, siendo el 82% imputadas a las guerrillas marxistas. De 1985 a 2012 se generaron 1.982 masacres, el 58% de las mismas fueron responsabilidad de grupos paramilitares. Hasta el 2020 se calcula que los desplazamientos podrían haber superado los ocho millones, según datos del gobierno (Díaz, 2019), manteniendo a Colombia como el país con mayor número de desplazados en un conflicto interno (ONU, 2020).

En relación al involucramiento de menores edad, Colombia es el único país en el hemisferio, donde pueden encontrarse niños soldados en su conflicto (ANS, 2016). Entidades internacionales calculan entre 11.000 y 14.000⁵ menores, han sido vinculados en actos de guerra en ese país (UNICEF & Human Rights, 2005). Por otro lado, en lo que concierne específicamente a la violencia sexual, el ya mencionado informe “Basta Ya” plantea que de 1985 al 2012 hubieron 1.754 víctimas de este tipo de abusos (GMH, 2013), y en este mismo contexto, la corporación “Rosa Blanca”, integrada por 300 exguerrilleras y más de 900 solicitantes nuevas, han descrito las brutales experiencias que sufrieron niñas esclavizadas con fines sexuales, por parte de dirigentes de las FARC. Las cifras de este tipo de abuso aún son inciertas, para Herbin Hoyos, un importante activista por los derechos de los niños en el contexto del conflicto colombiano, en realidad podría hablarse de un número aproximado de 39.700 menores, que vivieron situaciones parecidas (Bocanegra, 2020).

Los grupos paramilitares, por su parte, fueron responsables de actos en varios aspectos similares al de las guerrillas a la que pretendía combatir (Montoya,

5 La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y la Fiscalía General de la Nación de Colombia, presenta otras cifras, estiman en 8.090 los niños, niñas y adolescentes víctimas de vinculación a grupos armados ilegales en el país.

2008), sin embargo, sus acciones no buscaron ser justificadas bajo el mismo aparataje intelectual que las de las guerrillas, y de hecho los grupos que quedaron activos luego del proceso de desmovilización del 2006, se conocen simplemente como BACRIM o bandas criminales. No existe ningún intento sistemático de intelectuales, políticos o comunicadores por justificar o legitimar sus crímenes.

Luego de más de medio siglo de violencia ininterrumpida, el gobierno de Colombia y las FARC consolidaron un proceso de negociación bilateral, para la paz. Iniciando lo que algunos autores como Calderón (2016) han llamado “la etapa intermedia del Conflicto”, marcando un sendero hacia el “posconflicto”.

Un primer acuerdo fue firmado entre las partes el 26 de septiembre de 2016, sin embargo, este fue rechazado por el pueblo colombiano en un Plebiscito referendario el mismo año. Frente a esta circunstancia se realizaron algunas observaciones menores, que incluían críticas de quienes cuestionaban varios puntos. Finalmente, el Acuerdo para la Terminación Definitiva del Conflicto,⁶ fue firmado en Bogotá el 24 de noviembre de 2016, con el antecedente de que la mayoría de colombianos miraban con desconfianza las grandes ventajas que obtenían los dirigentes de las FARC, con este acuerdo.

Entre los puntos más conflictivos, está el poco alcance en la reparación integral de las víctimas de las guerrillas (incluyendo el tema de los niños soldados y las esclavas sexuales), así como, la entrega de escaños para líderes guerrilleros en el Legislativo Colombiano.

La firma de los acuerdos con las FARC, no necesariamente significó el advenimiento de la etapa post conflicto como se esperaba,⁷ de hecho existen varias acusaciones de lado y lado sobre incumplimientos de diversos tipos. Con la llegada del gobierno de Iván Duque en 2018, los reclamos se hicieron más intensos. Varios sectores, responsabilizan al mandatario de la muerte de unos 250 excombatientes, desde la firma del pacto (*France 24*, 2021).

Por otro lado, algunos de los dirigentes de la guerrilla, que habían participado activamente en las negociaciones, como Iván Márquez y Jesús Santrich, retomaron las armas luego de acusaciones de haber estado involucrados en actividades ligadas al narcotráfico.

Las particularidades de un tratado de paz, considerado conflictivo e incompleto por la mayoría de los colombianos, parece haber ajustado los resortes de una

6 Alrededor de 13.000 combatientes de las FARC dejaron las armas. Algunos, formaron el partido político FARC, que cambió su nombre a Comunes (*France 24*, 2021).

7 A parte de existir grupos con los que no se avanzó en las negociaciones como el ELN.

tradición política que se resiste a desechar la violencia, como un método recurrente para solucionar conflictos.

El síndrome de los monstruos buenos. ¿Cómo se han legitimado los excesos cometidos por los grupos irregulares, en el ámbito intelectual?

Si bien, en las diferentes etapas del conflicto, los simpatizantes de cada uno de los bandos procuraron sustentar las posiciones de los actores confrontados; fue durante las negociaciones de paz, del 2012 al 2016, y durante la etapa posterior a la firma de los acuerdos, que se ha profundizado un fenómeno al que se puede denominar “la benévola negación del otro”; un sofisticado aparato intelectual y conceptual que parece buscar legitimar ciertas formas de violencia extrema, a nombre de conceptos de naturaleza ideológica.⁸

Esta situación se hace más compleja si consideramos lo que dice Calderón (2016), cuando afirma que las etapas de posconflicto, generalmente son las más difíciles de superar y las que más recursos van a exigir. Es precisamente en este contexto que se ha generado una disputa discursiva entre quienes son críticos a la violencia por sobre los intentos institucionales para procesar problemas, y aquellos que en cierta forma tratan de legitimarla.⁹

Uno de los estudios más interesantes relativos al mencionado tema, se lo debemos a Garzón y Agudelo (2019). Los autores plantean que:

Los dirigentes políticos, las empresas ideológicas y los intelectuales que justificaron el recurso de las armas o se inhibieron de rechazarlo explícitamente, han tenido responsabilidad en el hecho de que en Colombia no se haya podido afianzar una cultura cívica de rechazo incondicional de la violencia política, al punto que algu-

8 Incluso en enunciados de algunas organizaciones que pretenden analizar el conflicto, es posible interpretar intentos por justificar los conflictos, por ejemplo, CIBOD (2019) plantea: “En sus inicios, la desigual repartición de la tierra y la falta de espacios para participación política dieron cabida al uso de la violencia y la lucha armada”.

9 Pueden identificarse, por ejemplo, intentos de relativizar los actos de terror desatados en el conflicto considerando que estos no son más que una de las muchas manifestaciones de la violencia. Así pues, para Galtung (2003a), el concepto de violencia tiene una triple dimensión: directa, estructural y cultural. Este tipo de orientaciones parecen sugerir que la “violencia directa” podría ser causada por la presencia de las otras dos “violencias” la “estructural” (generalmente relacionada a distribución de la riqueza), y la “cultural” que parece hacer referencia a los discursos hegemónicos probablemente excluyentes en una sociedad.

nos estudiosos consideran que uno de los ingredientes de la longevidad del conflicto armado es que durante un largo período el recurso a la lucha armada había sido considerado como ‘normal’ por amplios sectores de la izquierda colombiana (Pécaut, 2017: 281).¹⁰

Garzón y Agudelo (2019), toman la información para su estudio de doce ensayos y dos relatorías escritas por intelectuales en el contexto de las negociaciones para la paz firmada en 2016. Ambos autores dividen los relatos en dos corrientes: por un lado la visión reformista de las instituciones colombianas que: “se ha decantado por un análisis evolucionista positivo, siendo críticos a la violencia como medio de consecución de metas y objetivos sociales”. Y por otro lado: “una lectura rupturista de la historia tendiente al escepticismo sobre los principales cambios institucionales, considerados siempre como insuficientes, y que legitiman -abierta o indirectamente-, una solución radical frente al sistema político (Garzón y Agudelo, 2019: 54).

Es en medio de la disputa de relatos, que los autores antes citados identifican tres lugares comunes, los cuales son utilizados a modo de trinchera por los bandos intelectuales confrontados. El primer lugar común es el Frente Nacional (1958-1974), aquel pacto político entre liberales y conservadores, creado precisamente para retomar el período democrático y poner fin a las guerras civiles, en el que se buscó generar un proceso de estabilidad política; los acuerdos fueron confirmados a través del voto, lo que les dio legitimidad. El Frente Nacional, planteó un sistema bipartidista que determinó equilibrios en el manejo del poder. El sistema, perfectible al enfocarse en los partidos tradicionales, fue percibido por actores emergentes como una barrera que limitaba su plena participación política. Varios intelectuales se remontan a este período y a esa rigidez en la posibilidad de incluir nuevos representantes políticos, como uno de los justificativos del nacimiento del conflicto armado. A este lugar común se lo puede llamar “el de la institucionalidad imperfecta”.

Un segundo lugar común, es el que tiene que ver con las “causas objetivas del conflicto armado”, según los ya mencionados Garzón y Agudelo (2019), este estaría basado en las llamadas “teorías críticas” y supone que, dado que existen circunstancias desfavorables en el ámbito económico y social, entonces la violencia armada debería considerarse válida para mejorar las cosas. Los autores sostienen que el lugar común de las causas objetivas difundió la impresión que los respon-

10 Conservamos la cita dentro de la cita.

sables de la violencia armada, por ejemplo, grupos terroristas como las FARC, no serían plenamente responsables de los excesos cometidos sobre las víctimas, porque estaban siendo empujados por causas estructurales.

El tercer lugar común, mencionado por los autores citados, es el del altruismo y la heroicidad de los combatientes irregulares. Según esta idea, quienes atentan directamente contra la vida, la libertad y los derechos básicos de las personas, no solo deberían ser tolerados, sino que de hecho se convierten en sujetos fascinantes por haber entregado sus mayores esfuerzos en la lucha contra un sistema económico, al que consideran inequitativo. A nombre de un pretendido bien superior, actos de notoria crudeza como aquellos cometidos por las FARC, han llegado a ser considerados hazañas revolucionarias dotadas de un halo de romanticismo.

Por otro lado, en lo que respecta a otros grupos violentos, como los paramilitares, cuyos actos en ocasiones se pueden comparar a los de las FARC, existe un consenso básicamente unánime entre los intelectuales, tanto reformistas como rupturistas, en condenar sus acciones, exigir que sus crímenes sean juzgados y no romantizar sus abusos.

Los tres lugares comunes analizados por Garzón y Agudelo (2019), tienden a repetirse sistemáticamente por las industrias ideológicas en los foros relativos al tratamiento del conflicto armado, pudiendo haberse convertido en extrañas operaciones retóricas de negación de los derechos de las víctimas, es decir en “benévolas formas de negación del otro”. Aquella tendencia podría seguir aplicándose en casos más recientes como las protestas urbanas con desbordes violentos.

El paro del 2021 en Colombia, ¿la negación del otro como método?

En abril 2021, se inició un paro en Colombia gatillado por la propuesta de Ley de Solidaridad Sostenible.¹¹ La reforma tributaria, buscaba generar ingresos a través del alza de impuestos como el IVA; no solo a varios productos de la canasta básica sino también a los servicios públicos como agua, energía eléctrica, gas, telefonía, para los estratos de mayores ingresos (cuatro, cinco y seis).

El paro fue convocado por varios de los sectores que protagonizaron protestas en 2018 y 2020. De alguna manera, las reformas del gobierno de Duque fueron una respuesta a las exigencias de los movimientos sociales hacia una mayor inter-

11 Puesta a consideración del Legislativo por el Ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla.

vención del Estado en la economía colombiana y la necesidad de inversión en programas sociales. El Presidente anunció que buscaba recaudar alrededor de 6.294 millones de dólares (el equivalente al 2% del PIB), y usar el dinero únicamente en proyectos como el programa Ingreso Solidario, una iniciativa de apoyo económico a hogares en condición de pobreza (*BBC News*, 2021).

Dada la intensidad de las manifestaciones, especialmente por causa de los bloqueos de carreteras y otras acciones violentas en varias ciudades, principalmente en Cali, el 2 de mayo el Presidente retiró el proyecto de ley y los ministros relacionados con esta propuesta, renunciaron. Se anunció la redacción de una nueva propuesta normativa, aunque varios sectores políticos reclamaron sentirse excluidos de este nuevo proceso.

A pesar de que la causa original del paro fue dada de baja, las protestas no solo que continuaron, sino que de hecho se hicieron más intensas. Pronto se establecieron nuevas demandas para justificar la paralización generalizada, por ejemplo: la exigencia de retirar la Reforma a la salud, que supuestamente pretendía reducir el papel del Estado; el libre acceso a la educación superior; los supuestos incumplimientos a los Acuerdos de paz con las FARC-EP (en cuyo contexto se denuncia la muerte de alrededor de 274 excombatientes desde el 2016); el rechazo a fumigaciones con glifosato en plantaciones de coca; el rechazo al equipamiento a la policía y el ejército; así como el reclamo de hechos que habrían acontecido bajo el gobierno de Uribe, relativos a los abusos de la fuerza pública en la guerra contra las guerrillas. Algunos añadieron incluso el descontento generalizado por causa de los efectos de la pandemia de COVID-19.¹²

El gobierno de Duque continuó cediendo posiciones, facilitando que se cumplan las demandas más importantes de los manifestantes: La gratuidad en la matrícula de las Universidades Públicas para los estratos 1, 2, y 3 fue establecido el 11 de mayo; mientras que la propuesta a la reforma a la salud fue retirada el 19 de mayo. Sin embargo, los desbordes sociales y las paralizaciones continuaron.

El “Comité Nacional del Paro”, cuerpo que se anuncia como representante de los sectores sociales convocantes, no ha reconocido que varias de las demandas originales de las protestas habían sido conseguidas. En su lugar iniciaron nuevos pliegos de peticiones, algunos difícilmente alcanzables, entre ellos; la renta básica de emergencia de un salario mínimo o el fin de la erradicación de cultivos de coca, así como varios otros temas comunes a la retórica de los movimientos sociales.

12 De hecho, según las estadísticas oficiales del gobierno colombiano, la pobreza aumentó un 6,8%, como consecuencia de la pandemia.

Esto generó una notable dispersión de discursos. En su conjunto, las demandas exigidas por el Comité Nacional de Paro superaron los 80 billones de pesos, más del triple de lo que las reformas tributarias de Duque aspiraban a conseguir. No se propusieron estrategias realizables para conseguir esos recursos.

Uno de los temas centrales que se ha ido consolidando a lo largo de las protestas tiene que ver con la denuncia de abusos policiales. Hasta el 25 de mayo, se confirmaron 47 fallecidos, y 2.145 heridos (1.062 civiles y 1.083 policías) (*Infobae*, 2021). También se registraron más de 126 ataques a misiones médicas y ambulancias en el país, en los que se registraron la muerte de dos bebés que se trasladaban en ambulancias (*Semana*, 2021). Además se registraron cientos de saqueos, ataques a medios de comunicación y cientos de casos de destrucción de bienes públicos, entre ellos la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía en Popayán, el Palacio de Justicia de Tuluá, y el Edificio de la Gobernación de Nariño (Lemos, 2021). Entre los muchos casos de violencia, una mujer policía denunció haber sido abusada sexualmente por un grupo de manifestantes (*Semana*, 2021a).

Las consecuencias económicas del paro han sido cuantiosas. Algunas cifras hablan de pérdidas por 13 o 14 billones de pesos (unos US\$3.500 millones), mientras que la pandemia generó pérdidas en las empresas por un equivalente a 64 billones de pesos (US\$17.300 millones) (ANDI, 2021).¹³

Adicionalmente, las manifestaciones estuvieron relacionadas con altos niveles de contagio de COVID-19. A pesar de esto, varios líderes sociales afines a las protestas justificaron estas circunstancias, así Diógenes Orjuela, líder sindical, plantea que “la gente, al movilizarse, tomó la decisión de vencer el miedo a la pandemia porque tienen más miedo al hambre, a la exclusión y al paquetazo de Duque” (Pardo, 2021), afirma esto a pesar de que las reformas tributarias propuestas por el gobierno ya habían sido retiradas.

El sentido de las palabras

La problemática en torno al paro en Colombia de 2021, fue descrita por las empresas ideológicas (intelectuales, líderes de movimiento sociales, medios de

13 En un reportaje de la *BBC* se señala: “En el Valle del Cauca, la región cuya capital, Cali, ha sido el epicentro de las protestas, el Paro significó un shock a la economía mayor que la pandemia, generando afecciones en un 70% de las empresas; caídas en ventas para el 65%, cierres en un 10% y reducciones de nómina en el 26%. La SAC reporta que el paro generó la pérdida de 34 millones de litros de leche, 3 millones de pollos, 9.000 toneladas de trucha y 25.000 toneladas de aguacate, entre otros ejemplos” (Pardo, 2021).

comunicación, prensa, ONG), que cubrieron los eventos, desde varios marcos (frames) de interpretación procurando que las audiencias lleguen a conclusiones específicas. Este tipo de marcos han sido definidos desde la teoría framing, por autores como Gamson (1985; 1989), Goffman (1974); Gitlin (1980); Entman (1993), como la estrategia según la cual los sujetos, o instituciones, que describen fenómenos sociales pueden seleccionar ciertos aspectos de la realidad enfatizando u omitiendo determinados elementos, con el fin de sugerir diagnósticos, proponer posibles causas, inculcar juicios de naturaleza moral, e incluso insinuar potenciales soluciones para los problemas planteados.¹⁴

La utilización de marcos puede ser muy dinámica y depender de los objetivos que están buscando los actores que emiten la información. Aruguete (2011), por ejemplo, identifica marcos que pueden emplearse directamente para desprestigiar un antagonista político o ideológico, entre ellos los de: trivialización, demonización, personalización, victimización, dicotomización, o incluso deshumanización. El uso de marcos generalmente se encuentra relacionado con una clara estrategia de autorepresentación positiva y una representación negativa del antagonista según plantea van Dijk (1999; 2003).

A continuación, se propone una aproximación a los marcos con los que se ha buscado describir las particularidades del Paro en Colombia, desde titulares en medios de comunicación, editorialistas, articulistas, legisladores, y líderes políticos representativos. Se han seleccionado actores con posiciones antagónicas para contrastar sus enunciados.

Emisión de noticias

La cadena *teleSUR* no solo emite noticias por televisión, sino que su influencia en internet es de creciente importancia a nivel Latinoamericano. Si bien no es un medio colombiano, es bastante influyente en la izquierda de ese país. Entre sus

14 Existen distintos tipos de marcos (frames), y todos ellos buscan organizar un relato, a fin de persuadir a la audiencia sobre las conclusiones que deberían desprenderse de la información recibida. Entre varios otros Gamson (1995) distingue: Los marcos de diagnóstico (Diagnostic frames), los cuales buscan armar y legitimar las razones y propuestas sociales del emisor; marcos de pronóstico (Prognostic framing), los cuales critican la acción de grupos antagónicos, ofreciendo soluciones a los errores de estos, desde la lógica del contra marco (Counter framing); marcos de adversario (Adversarial framing), siendo estos los que basan su acción en la confrontación y el conflicto con un 'otro' al que se percibe como 'malo'; extensión de marco (Frame extension), que plantea ir más allá de los objetivos originales del actor social con el objetivo de conseguir más adherentes a su causa; marcos de motivación (Motivational framing), los que plantean el llamado a las armas ante una situación conflictiva.

titulares más leídos, con respecto al Paro se encuentran los siguientes: “Denuncian acciones represivas en medio del paro nacional en Colombia (2021); “Denuncian represión policial en varias ciudades de Colombia” (2021a); “Continúan protestas en Colombia contra modelo neoliberal” (2021b); “Bogotá registra otra noche de represión por parte del Esmad” (2021c); “Reportan más de 20 agresiones sexuales a mujeres durante protestas en Colombia” (2021d); “Colombia atraviesa una nueva noche de violencia por parte del Esmad” (2021e); “Colombianos rechazan decreto que criminaliza los bloqueos” (2021f).¹⁵

Dado que el gobierno de Duque retiró tempranamente la reforma tributaria, las reformas a la salud, y ofreció concesiones como matrícula universitaria cero hacia los quintiles más vulnerables; el medio ha centrado su atención en la fuerza con la que la policía reprime las protestas más que en las demandas de las mismas; o en caso que deba referirse a ellas habla de la resistencia que representa el paro frente a lo que llama “modelo neoliberal”, dando por sentado que aquella mención tiene la suficiente connotación negativa como para legitimar los excesos. La cadena *teleSUR*, apela a los elementos emocionales de su audiencia, desde “marcos motivacionales”, “contra marcos”, y “marcos adversarios”.

Por su parte la Revista *Semana*, un medio de comunicación de alcance nacional, principalmente enfocado a la prensa escrita y las transmisiones en internet, podría considerarse el espacio periodístico con visión más crítica a las protestas. Sus titulares y contenido tienden más a buscar la aprobación de su audiencia, describiendo circunstancias que apelando a las emociones. Esto puede notarse en algunos de sus titulares más leídos: “¿Cuántas empresas en Colombia han suspendido su operación por el paro nacional?” (2021b);¹⁶ “La producción de hidrocarburos llegó a un mínimo histórico con menos de 700.000 barriles por día” (2021c); “El Gobierno niega que haya una actitud dilatoria en sus diálogos con el Comité del Paro” (2021d); “Cali: hombres armados intimidaron a personal médico de un hospital por atención de un herido” (2021e).¹⁷ *Semana* ha hecho énfasis en lo que se conoce como “marcos de diagnóstico”.

15 Los titulares señalados corresponden a *teleSUR*.

16 La Red de Cámaras de Comercio (Confecámaras), publicó una reciente encuesta sobre la situación que viven los empresarios del país en el marco de paro nacional: el 22,2% de las empresas del país suspendió su operación por bloqueos, mientras que el 53,4% de las demás empresas ha operado entre el 1% y 50% de su capacidad; Colombia dejó de producir más de 560.000 barriles de petróleo por bloqueos en el paro nacional, según MinMinas.

17 Los titulares señalados corresponden a la revista *Semana*.

Editorialistas

María Jimena Duzán, editorialista de *El Espectador*, *El Tiempo*, *El País*, posiciona su relato desde “contra marcos” y “marcos de adversario”, remitiéndose a la figura del expresidente Uribe como elemento simbólico al que hay que rechazar, como algo tácito, dejando de lado las demandas del paro, y las concesiones ya realizadas por el gobierno de Duque: “Estas protestas son un plebiscito contra el uribismo y sus dogmas estigmatizantes” (Duzán, 2021).

En cuanto a los excesos y la violencia en las calles, la editorialista se refiere a ellas como “formas” cuando aclara: “Esta espantosa contradicción entre el culto por las formas y la represión se vio reforzada con la llegada al poder del expresidente Uribe”, “La represión es la receta que tiene el uribismo para quedarse en el poder y salir airoso en las elecciones del año entrante” (Duzán, 2021).

Los medios de comunicación, entendidos por la editorialista como “tradicionales” también son posicionados como antagonistas a los intereses sociales: “En cuanto a los medios “tradicionales”, salieron perdiendo. Sus titulares hacían eco de los actos vandálicos, invisibilizando de esta forma, a la mayor parte de las protestas pacíficas” (Duzán, 2021a). Los medios tradicionales “no solo no son bienvenidos: les tienen prohibida la entrada porque los consideran representantes del bando enemigo y los creen incapaces de oír y de escuchar. Allí [se refiere a las protestas], solo aceptan la entrada de medios y periodistas independientes” (Ídem). Entonces para Duzán, el “uribismo” es el principal antagonista y el verdadero origen del conflicto, el presidente Duque no sería más que, un actor sujeto al direccionamiento de ese líder político, y la prensa tradicional sería un agente legitimador de los intereses de los actores ya mencionados. No se habla del alcance de los actos violentos, ni del “el otro” afectado.

Otro editorialista afín a las tesis del paro, Antonio Caballero, (*Los Danieles*) hace énfasis en el rechazo a la intervención militar, para procesar los desbordes violentos del paro: “¡Plomo es lo que hay! Iván Duque llama a la “asistencia militar” [...] suena a militarización de las ciudades contra la protesta” (Caballero, 2021). También echa mano de los marcos de diagnóstico haciendo énfasis en los motivos estructurales del paro, dejando en segundo plano, cualquier interferencia de actores políticos en la organización de los mismos: “a Petro le hacen [los que protestan] el menor caso. Porque el paro no viene solo de la tributaria (la que prendió la mecha), sino de una acumulación de motivos de fondo, nacidos de la monstruosa inequidad de este país” (Caballero, 2021). Luego recurre a la estrategia

de la “comparación negativa” (van Dijk, 1999), cuyo referente común suele ser el nazismo: “Habla Uribe, el presidente eterno de Duque y de los uribistas, de la revolución molecular disipada que inventó un neonazi chileno” (Caballero, 2021). Finalmente aclara, que el rol del gobierno en la deslegitimación de las protestas (para ese entonces ya sin una demanda clara), obedece a intereses de tipo electoral, proponiendo un “marco de pronóstico” vedado, porque hace una insinuación de carácter electoral hacia sus lectores: “hay que poner el ojo en el año 2022. Porque en Colombia todo, siempre, por grandes que sean la violencia y el caos todo termina en una elección presidencial” (Caballero, 2021a).

En cuanto a editorialistas críticos al paro, muchos de ellos continúan la tendencia que se observó en los titulares de algunos medios críticos, mostrando los números y los datos relativos a los excesos identificados en las manifestaciones. Así por ejemplo, Salud Hernández de la revista *Semana* plantea: “Solo ayer jueves fueron 545 muertos y llevamos varios días por encima de los 500 diarios. Al país se le olvidó que existe la COVID y van a seguir con las aglomeraciones” [...] “La alcaldesa de Bogotá achaca 25.000 contagios a las marchas, pero el Comité organiza nuevas concentraciones” (*Semana*, 2021f); “No conceden importancia al salvajismo que sufrimos a diario, ni les preocupa que expandan el virus y aumenten las muertes con sus aglomeraciones en el peor pico de la pandemia” (Hernández, 2021). La editorialista echa mano del marco de victimización, al denunciar que los derechos de quienes no adhieren al paro, no son respetados: “Los derechos del país que opina distinto solo existen para pisotearlos” (Hernández, 2021). Luego utiliza una estrategia que podría encajar con lo que van Dijk (1983), llama “móvil de honestidad aparente”, aunque con argumentos que pueden ser verificados cuando dice: “Es obvio que, en una nación con 21 millones de pobres, siempre habrá razones para expresar rabias y descontento [...] pero no nos engañemos, este paro, que arrancó cuando el país necesitaba recuperar su aparato productivo, lo convocaron intereses políticos. No dudo que la izquierda tenía el deseo que Colombia no salga de la crisis, temían que el gobierno de Duque rescatara el tejido empresarial y el país creciera” (Hernández, 2021). Luego enuncia desde un marco de diagnóstico: [...] “tengamos presente que estas cinco semanas de caos, de odios, de anarquía han quitado las ganas de invertir a muchos empresarios pequeños y medianos” (Ídem).

Otra editorialista María Isabel Rueda, de *El Tiempo*, se muestra crítica a las reformas tributarias que originaron el paro, aunque no justifica los desbordes y la violencia en las manifestaciones: “Si algo ha manejado mal este Gobierno, ha sido precisamente esta reforma tributaria [...] la clase media sería la más directamente

perjudicada: es arbitrario hacer depender buena parte del recaudo adicional que se busque, del impuesto sobre personas de ingresos medios y medios bajos, con incrementos superiores al 100%” (Rueda, 2021). Realiza un marco de diagnóstico crítico a las medidas económicas, sin embargo, al haber sido estas retiradas de la discusión, no las mira como justificación de la violencia.

Continuando con el “marco de diagnóstico” la articulista realiza una clasificación de los protagonistas del paro en tres grupos: “en las nutridas marchas que vemos por Colombia hay una angustiada confluencia de tres grupos: [...] primero están los que, con todo derecho, se han volcado a las calles a protestar pacíficamente, en ejercicio de sus libertades [...]. Los segundos son los vándalos, los que aparecen para destruirlo todo, incendiar las gobernaciones, las estaciones y los buses, para quemar vivos a unos policías dentro de su CAI, agarrar a piedra, a cuchillo o a bala a la autoridad o a los ciudadanos que intentan proteger sus propiedades [...]. El tercer grupo es el de los que están bloqueando la locomoción de la gente, de los camiones de abastecimiento, de los buses, de las ambulancias. Este grupo cree que los derechos de los demás no existen, solo los de ellos”. “Los bloqueos, a su vez, disparan el contagio y ocupan con los heridos de las marchas las pocas camas libres” (Rueda, 2021a).

La articulista identifica una vez más el fenómeno de “la negación del otro”, la anulación de los derechos de aquellos que no comulgan con las ideas de los manifestantes y cuyas pérdidas están constantemente legitimadas por actores políticos que han romantizado tales agresiones. La articulista reconoce posibles responsables, continuando con el marco de diagnóstico y llegando al marco de antagonismo, para lo cual se hace tres preguntas: “La primera es si en los paros ha habido infiltración guerrillera. Y la respuesta categórica es sí [...] son las milicias urbanas del ELN [...]. La segunda pregunta es, qué tan metido está Maduro en esto. Lo de Maduro es probable [...]. La tercera pregunta es qué tan metidos están los políticos de izquierda [...], ni bobos que fueran van a dejar pasar semejante oportunidad” (Rueda, 2021b). Luego concluye que las razones del paro no están en sus demandas, pues la mayoría y las más importantes ya fueron cumplidas (retiro de la reforma tributaria, de la reforma de salud, concesión de matrícula cero para quintiles bajos bajos).

Ante las condiciones sobre por qué el paro continúa a pesar de que las demandas sean ambiguas, la articulista continúa con el marco de diagnóstico: “si uno estudia el pliego de peticiones, encontrará dos tipos de propuestas: las que se pueden conceder y las que no son serias, ni viables. En cuanto a las primeras, Duque

ya concedió algunas [...] pero ellos son inteligentes, los que están haciendo estas peticiones saben que muchas de ellas son inviables; lo cual nos obliga a pensar que ahí no está su objetivo. La prueba de que la educación gratuita les importa un pito, es la furia que les dio a los del paro porque el Presidente la anunció esta semana de manera unilateral” (Rueda, 2021b).

Legisladores

Entre los legisladores más activos a favor de las tesis del paro se puede mencionar a Gustavo Bolívar. No solo que apoya las movilizaciones, sino que exige que no sean coyunturales sino permanentes: “apoyo marchas y cacerolazos, iré a ellas y acabaré otra sartén, pero, con todo respeto, eso no sirve para nada. No conozco una sola sociedad que haya provocado cambios con una marcha de 4 horas. Los invito a quedarnos indefinidamente” (*Forbes*, 2021). El Senador, estuvo promoviendo la colecta de “elementos de protección” para las personas de primera línea y al respecto dijo: “son elementos de protección; de no existir los escudos de primera línea serían 200 y no ochenta los muertos” (*BLU Radio*, 2021). Bolívar expresa que de llegar a ganar la presidencia, el candidato de su orientación política (Gustavo Petro): “desmontaremos el ESMAD. Inaudito que usemos los impuestos para matar, violar y sacarle los ojos a nuestros jóvenes” (*KienYKe*, 2021).

Las declaraciones del Senador no necesitan enunciarse desde ningún “marco”, no trata simplemente de insinuar un juicio de valor, sino que directamente busca persuadir sus tesis a favor del paro; él expresa directamente que apoya los enfrentamientos violentos del paro y repudia cualquier accionar de la policía frente a ellos.

Otro legislador, Iván Cepeda, busca responsabilizar a su principal antagonista político, es decir, aquello a lo que llama uribismo, como el causante de los excesos policiales que se pudieron dar durante el paro, así: “bajo los gobiernos uribistas se han perpetrado masivos crímenes de lesa humanidad contra los jóvenes” (*teleSUR*, 2021g). Ante la concesión de varias demandas por parte del presidente Duque, Cepeda sigue sosteniendo la legitimidad del paro desde la enunciación de causas estructurales relativas a las condiciones de vida de sectores populares, anunciando que estas podrían mejorar, si se continúa con lo que ellos definen como una “lucha social”: “el retiro de la reforma no resuelve el problema, porque retirarla es no seguir asfixiando, pero lo que la gente quiere es una renta básica, quiere tener un ingreso. Ya no basta con que no la sigan estrangulando con impuestos, necesita que haya algún tipo de solución y eso es lo que el Gobierno no está ofreciendo” (Gálvez, 2021).

El Senador también hace referencia al accidentado Acuerdo de paz, que desde su perspectiva, podría haberse visto comprometido por el gobierno de Iván Duque: “En este momento, hay 270 firmantes de paz que han sido asesinados y un número muy alto de familiares de exguerrilleros asesinados” (Gálvez, 2021). Es decir, vincula las consecuencias y alcances del paro con los reclamos por parte de los voceros de las FARC, dejando claro el vínculo entre las protestas y la retórica de la insurgencia.

Iván Cepeda también recurre a lo que Ernesto Laclau (2005), definiría como “lógica articuladora”, utilizando el paro como un significativo vacío con el potencial de juntar diversas demandas, entre ellas las de actores que pretenden convertirse en nuevos protagonistas; por ejemplo los campesinos que exigen que se deje de erradicar plantaciones de coca en sus territorios, así: “estas comunidades son las principales víctimas... donde se cultiva la hoja de coca, el Gobierno cree que la solución es fumigar los cultivos con glifosato -un herbicida-, eso les genera a las comunidades indígenas una situación insostenible” (Gálvez, 2021).

Sobre los legisladores críticos, entre los más activos con respecto al cuestionamiento a los excesos durante el paro podemos mencionar a María Fernanda Cabal, para ella: “los manifestantes son los que tienen bombas molotov que le tiran a la policía a los demás ciudadanos. ¿Pobrecitos?, no. Acá hay un desequilibrio de derechos, que es lo que le encanta a la izquierda. A la izquierda le encanta proteger el desorden diciendo que es defensa de derechos humanos” (*La Libertad*, 2021). Cabal, no tiene problemas en desbordarse en recursos de lexicalización y representación negativa (van Dijk, 1983), y expresa: “no hay que permitir que nos secuestren ni los vándalos, ni los terroristas, ni los indígenas, ni nadie [...] Aquí está en juego no la libertad de los caleños ni de los vallecaucanos sino de todo Colombia. Porque la estrategia terrorista es empezar por el Pacífico, por donde sale la coca y entran el dinero y las armas” (*El Tiempo*, 2021). El marco de diagnóstico, aparece entrelazado con el recurso de la comparación negativa: [...] “Para mí, el cerebro de esto es el ELN, siempre ha sido el rey de las movilizaciones sociales” (*El Tiempo*, 2021a).

Otro legislador crítico, Ernesto Macías Tovar, tampoco puede evitar que su discurso esté empapado de recursos de lexicalización negativa, haciendo que el mensaje de su argumento quede de cierta forma opacado por el peso de los adjetivos: “Colombia es víctima del terrorismo urbano, infiltrado en la protesta social. Hay dineros del narcotráfico y mano negra extranjera. Vándalos y terroristas se camuflan para destruirlo todo. Lamentable que haya políticos detrás, creyendo que obtendrán réditos electorales” (Macías, 2021).

En un intento de emitir un mensaje desde los marcos de diagnóstico, tampoco puede evitarse el recurso recurrente de vincular a la protesta con la acción de las guerrillas: [...] “Hay que separar dos cosas: por un lado, la protesta social, la cual debe catalogarse de legítima y natural en una democracia; y, por otro lado, el vandalismo, los bloqueos y el terrorismo que infiltraron la protesta pacífica, lo cual debe catalogarse como atentatoria contra la vida y la democracia” (*La Nación*, 2021).

Este Legislador además, hace énfasis en que el tratado de paz firmado en 2016 por Santos, de características conflictivas y perfectibles, puede definirse como un punto fundacional del actual conflicto: [...] “uno de los principales responsables de la situación que vive hoy el país es el expresidente Santos. Nosotros advertimos que un acuerdo de paz mal hecho generaba más violencia” (*La Nación*, 2021).

Líderes políticos representativos

La figura política más representativa a favor de las tesis del paro es el senador Gustavo Petro. Las enunciaciones de Petro con respecto a las protestas buscan ser moderadas, con un tipo de retórica orientado a una potencial campaña electoral: “Un paro es antes que nada un cese de actividades. No abrir su negocio. No sacar su carro. No ir al trabajo. No comprar gaseosas. No ir a comprar nada en grandes superficies comerciales. No hacer transacciones financieras. Retirarse de fondos privados de pensiones” (*Semana*, 2021g). A pesar de que la reforma tributaria remitida por Duque fue retirada, llama la atención que Petro sigue refiriéndose a ella: “La gente que está en la calle es la juventud popular, la juventud barrial. Esa juventud que sale con la lucha contra la reforma tributaria quiere seguir luchando” (*Expreso*, 2021), enseguida, reconoce que tras el acto de ceder del Gobierno ya no quedan demandas definidas: “pero en estos momentos no hay unos objetivos claros” (*Expreso*, 2021).

De todos modos, asume que las protestas buscan implantar la “paz”, probablemente haciendo referencia a las demandas de las FARC con respecto a lo que denuncian como un tratado incompleto, a los curules adicionales en el Congreso que se exigen y a las muertes sospechosas de exguerrilleros. Además, justifica la acción de las masas: [...] “La democracia y la paz se defienden con multitudes” (Valencia, 2021).

Petro, no duda en ubicar su discurso dentro del marco de victimización, cuando denuncia que la prensa lo relaciona con la organización del paro, así ante una publicación de *Semana*, que acusaba a Petro de estar detrás de las protestas, declara

lo siguiente: “Solicitamos a la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), se pronuncie sobre este caso de manera contundente porque es inaceptable que se utilice el periodismo para declarar como ‘blanco’ a un ser humano” (Alvarado, 2021). Para Petro además los actos de violencia durante las manifestaciones han sido provocados por el Gobierno, afirmando, que estas se deben a las condiciones de inequidad de la sociedad: “La violencia la provoca el presidente de la República para construir divisiones en la sociedad entre las clases medias [...] para producir una derechización de la sociedad y para intentar, a través de eso, sacar ventaja electoral o impedir las elecciones” (*Forbes*, 2021a). Otro de los enunciados recurrentes es que el partido de Gobierno estaría usando las protestas para sacar réditos electorales.

La figura crítica al paro más visible, es por otro lado, el expresidente Álvaro Uribe. El exmandatario no duda en solicitar el apoyo de las Fuerzas Armadas en el manejo de las protestas: “El Ejército en las calles es urgente y mejor que estar registrando las noticias del asesinato y la destrucción vandálica” (*Semana*, 2021h). Aunque aclara que no solicita el uso de armas de fuego sobre las personas que protestan: “La tragedia de violencia ha sido enorme en Colombia; no estamos pidiendo que les dispare a los manifestantes, nunca; acá lo que estamos pidiendo es que se respete a la policía y no se le niegue el derecho a defender su integridad” (Galindo, 2021).

Uribe no duda en acusar a los grupos irregulares de incentivar y auspiciar los desmanes y, adicionalmente plantea la tesis que a nivel internacional los voceros de las guerrillas podrían estar manejando una diplomacia paralela: “El terrorismo incendia al país, pero en el extranjero acusan al presidente. Se impone la diplomacia paralela del terrorismo, sus voceros políticos y organizaciones sesgadas que se escudan en los DD.HH” (*Semana*, 2021i). Incluso llega a denunciar los discursos en torno a los DD.HH., como justificativos de la violencia.

En las declaraciones de Uribe, no se relativiza el valor de las vidas que se pierden en las protestas: “Los familiares del policía asesinado sienten el mismo dolor que los familiares del civil asesinado” (Galindo, 2021). Las críticas al manejo de la crisis por parte del Gobierno, tienen que ver con lo que considera, una falta de firmeza al controlar la crisis: “Creo que al Estado en su conjunto le ha faltado autoridad” (Valbuena, 2021). Uribe se niega a considerar los excesos en las protestas como un derecho, y reclama que se ha abusado de ese concepto, aún desde el uso de convenios internacionales: “El Comité del Paro ha promovido y legitimado los bloqueos, ha invocado la legalidad con una equivocada apelación a la Organización Internacional del Trabajo, que nunca ha legalizado la violencia”

(Valbuena, 2021). Además, responsabiliza a la violencia de haber profundizado los problemas económicos del país: “La violencia y los bloqueos han aumentado la crisis social y económica. En el Valle del Cauca el 32% de las empresas han estado en parálisis y el 31% en restricciones. El daño de este mes de violencia iguala lo que se necesita en recaudo de nuevos impuestos para superar la agudización de la pobreza y avanzar en la política de juventud” (Ídem). También hace énfasis en que los sectores más pudientes puedan aportar más en impuestos: “Se requieren tramitar con urgencia en el Congreso los impuestos que debe pagar el sector más pudiente para atender la problemática social, solución que legitima a la autoridad democrática” (Ídem).

Desde un marco de “pronóstico”, Uribe alerta sobre la posibilidad que los enfrentamientos armados, generen espacios de defensa privada que puedan marcar el retorno del paramilitarismo y establecer una nueva etapa de violencia armada. “Por lo pronto hemos visto en las redes sociales, civiles armados, lo que uno podría decir en legítima defensa, pero si el vacío de autoridad sigue, eso va evolucionando hacia organizaciones privadas de autodefensas y termina en organizaciones criminales” (Castropé, 2021). “Colombia necesita una conciencia colectiva de seguridad que impulse la superación de esta violencia, enfrentar la violencia” (Uribe, 2021).

A modo de conclusión: la violencia benévola y la negación del otro

Cuando el personaje principal de la novela de Dostoievski, *Crimen y Castigo*, asesina a una mujer y su hija usando un hacha, inicia un largo debate con su propia conciencia: ¿aquel hecho lo hace culpable o, por el contrario, ha matado por causa de un bien superior, pues le espera un destino trascendente y se ha visto obligado a emplear formas radicales para conseguir sus altas metas? Raskolnikov se ve envuelto en una lucha interna que lo empujará lentamente hacia la desesperación. En cierto punto, precisará de la mano rígida de un comisario a quien confiese sus delitos para recuperar la paz.

Llegando a ser el Gran Otro descrito por Lacan (1997), del que Raskolnikov protagonista de *Crimen y Castigo*, se ha alejado luego de haber asesinado premeditadamente a dos de sus semejantes; la anciana usurera, símbolo de aquellos que acumulan riqueza; y su hija, alegoría de los daños azarosos (colaterales), que pueden ocurrir a terceros en cualquier conflicto, ambas, constituyen aquel “pequeño otro” negado. Un peso demasiado grande para el héroe literario, que al final de

la novela, concluye que ninguna causa por más que esté escudada en un futuro aporte a la sociedad o en la trascendente filosófica, puede justificar la negación del otro (del pequeño otro, nuestro semejante).

¿Hasta qué punto los colectivos humanos pueden tener las mismas especulaciones en torno a la conciencia que los individuos? Aquello es difícil de saber, pero lo cierto es que la tendencia de tratar de justificar actos violentos a nombre de una causa superior, es recurrente. Especialmente en los conflictos de naturaleza ideológica.

En lo que respecta al caso colombiano y los debates en torno a la violencia, es posible identificar dos corrientes intelectuales (Garzón y Agudelo, 2019), que tratan de pensar los alcances de la violencia extrema: por un lado, están los reformistas quienes reconocen cierta efectividad en las estrategias institucionales para solucionar conflictos y procesar demandas sociales, estos son críticos a la violencia como medio legítimo de lograr objetivos colectivos. Por otro lado, están los rupturistas, quienes han perdido toda confianza en los arreglos institucionales y consideran la violencia armada como una salida creíble para conseguir demandas sociales. Son estos últimos, los rupturistas, quienes tienden a legitimar las formas más crudas de agresión de grupos irregulares, como las FARC o el ELN. Este grupo considera a categorías como “La justicia social” como el Gran Otro lacaniano y a su nombre, los pequeños “otros”, las víctimas, pueden ser sujetos de una “benévola negación”, de una negación legítima. Este tipo de pensamiento ofrece el camino contrario al del personaje de *Crimen y Castigo* de Dostoievski. Aquí, la búsqueda de un ideal trascendente, sigue justificando la anulación de los semejantes (el otro con minúscula), por lo menos en el ámbito de la especulación intelectual.

Garzón y Agudelo (2019), plantean que aquellos círculos intelectuales que defienden posturas rupturistas, suelen apelar a tres lugares comunes para legitimar la violencia: el lugar común del Frente Nacional, al que nosotros hemos llamado, el lugar común de la “institucionalidad imperfecta; en segundo lugar, “las causas objetivas del conflicto”, y en tercer lugar el del “altruismo y heroicidad”, de los protagonistas. A nombre de estos tres elementos, las circunstancias de las víctimas quedan relativizadas y los sujetos receptores de la violencia pueden ser benévolamente negados.

En lo que respecta a las protestas en Colombia de 2021, con las importantes diferencias en cuanto a duración e intensidad, con respecto al conflicto colombiano, estos han tenido varios episodios violentos y han generado grandes afectaciones en un amplio sector de la población. Los excesos, de este episodio, también han sido justificados y legitimados por una buena parte de las empresas ideológicas del país. Luego de una aproximación a las emisiones de algunos medios de

comunicación, editorialistas, articulistas, senadores y políticos, y el análisis de los marcos desde los cuales enuncian los acontecimientos del paro, ha sido posible reconocer los mismos lugares comunes que se habían planteado antes, para justificar la lucha armada.

El primero, es el lugar común de la institucionalidad imperfecta. Uno de los elementos recurrentes entre quienes defienden los desbordes violentos del paro, tiene que ver con la poca eficacia del Gobierno a la hora de procesar los puntos de los acuerdos de paz. El gobierno de Duque es atacado por ser el supuesto responsable de las bajas entre exguerrilleros y la vuelta a las armas de antiguos firmantes de los acuerdos. También existe la recriminación permanente hacia el Gobierno, de ser una continuación de lo que llaman el “uribismo”.

El segundo, es el lugar común de las causas objetivas. Una vez procesadas varias de las principales demandas utilizadas como justificativo para iniciar el paro; por ejemplo, las reformas fiscales, la reforma de salud, y la consecución de matrícula cero entre quintiles 1, 2, y 3; el discurso en torno a la necesidad de legitimar el paro y sus actos de fuerza, se centró en la situación general de la economía colombiana. En efecto la pandemia empeoró las cifras de la pobreza, pues esta subió 6,8 puntos, como consecuencia de la crisis del COVID (*Agencia EFE*, 2021). De igual forma, la paralización de la economía, disparó las cifras de desempleo y subempleo, lo que ha empeorado las condiciones de vida de los colombianos. La situación de vulnerabilidad afecta a toda la región, aunque los convocantes a las protestas plantean que en el caso colombiano, estas cifras tienen como primera explicación la cercanía del gobierno de Duque con aquello que llaman: “el uribismo”. Sin embargo, incluso Gustavo Petro, líder visible de la izquierda colombiana, debió reconocer que los adherentes al paro no tenían demandas claras, mientras que, entre los puntos propuestos por el autodefinido “Comité del Paro”, tampoco se ha señalado soluciones tangibles, ni propuestas objetivas para mejorar los números o la situación estructural de los colombianos.

En tercer lugar, el “altruismo y heroicidad”, de quienes participan en las protestas. La muerte de bebés en ambulancias, el abuso sexual a mujeres policías, el incendio de infraestructura con agentes en su interior y, otros excesos, son vistos como eventualidades, o incluso como “formas”, por quienes legitiman las acciones del paro, a nombre del valor y entrega romántica de los manifestantes. La figura del guerrillero heroico con una boina mirando el horizonte, ha sido reemplazada por la de una persona con una máscara de gas casera, arrojando una botella de gasolina. Líderes políticos, como el senador Gustavo Bolívar, incluso hacen alarde de haber

entregado insumos para la lucha urbana, dejando claro que respaldan los excesos por considerarlos elementos necesarios para luchar contra un sistema inequitativo.

Tanto en el período de la lucha armada, como el fenómeno del paro, ha sido posible encontrar los mismos lugares comunes que pretenden legitimar la violencia, y donde la posición de los receptores de esa violencia “el otro”, queda relativizada. Los intentos por legitimar y justificar la violencia, estimada como benévola, desde círculos informados y creadores de narrativas, parece haberse consolidado como un nuevo escenario de batalla.

Bibliografía

Alvarado, Mauricio

2021. “Reconozco a la juventud como única protagonista del paro”: Petro”. En *El Espectador*. Recuperado de: <https://n9.cl/c20ny>.

Aruguete, Natalia

2011. “Framing. La perspectiva de las noticias”. En *La Trama de la Comunicación*, Vol. 15. Universidad Nacional de Rosario. Recuperado de: <https://n9.cl/22xi>.

Bocanegra, Nelson

2020. “Víctimas de reclutamiento forzado y abuso sexual en Colombia esperan reparación con pocas esperanzas”. En *Reuters*. Recuperado de: <https://n9.cl/bu96q>.

Caballero, Antonio

2021. “Esto que está pasando”. En *Los Danieles*. Recuperado de: <https://n9.cl/d3vg>.

2021a. “La imagen de Colombia”. En *Los Danieles*. Recuperado de: <https://n9.cl/irzkr>.

Castropé, Daniel

2021. “Uribe advierte renacer de paramilitarismo tras el paro en Colombia”. En *Diario Las Américas*. Recuperado de: <https://n9.cl/37xjp>.

Calderón, Jonathan

2016. “Etapas del conflicto armado en Colombia: hacia el posconflicto”. En *Latinoamérica, Revista de Estudios Latinoamericanos*, N°62.

Cubides, Fernando

2014. “Violencia Política en Colombia 1958-2010”. En *Revista de Economía Institucional*, Vol. 16, N° 30. Recuperado de: <https://n9.cl/7ea5u>.

Díaz, Milton

2019. “Colombia, primera en desplazamiento interno por cuarta vez”. En *El Tiempo*. Recuperado de: <https://n9.cl/4blp3>

Duzán, María

2021. “Lucas Villa y la generación que se cansó del uribismo”. En *El País*. Recuperado de: <https://n9.cl/xqme2>

- 2021a. “40 días que cambiaron a Colombia”. En *El País*. Recuperado de: <https://n9.cl/14e8a>.
- Entman, Robert
1993. Framing: toward clarification of a fractured paradigm. In *Journal of Communication*, Vol. 43, N° 4. Recuperado de: <https://n9.cl/wrc7v>.
- Galindo, Anthony
2021. “Paro nacional: Qué ha dicho Uribe y por qué ha generado polémica”. En *Diario AS Colombia*. Recuperado de: <https://n9.cl/kqhhp>.
- Galtung, Johan
2003. *Violencia Cultural*. Gernika Gogoratz. España.
- 2003a. *Paz por medios pacíficos. Paz y conflicto, desarrollo y civilización*. Gernika Gogoratz. España.
- Gálvez, Andrea
2021. “Iván Cepeda, senador colombiano: “El discurso del Gobierno pretende convertir a manifestantes en terroristas””. En *ElDiario.es*. Recuperado de: <https://n9.cl/gyqzz>.
- Gamson, William
1989. “News as Framing: Comments on Graber”. In *American Behavioural Scientist*, Vol. 33, N° 2. Recuperado de: <https://n9.cl/b1yz9>
- Garzón, Iván y Agudelo, Andrés
2019. “La batalla por la narrativa: intelectuales y conflicto armado en Colombia”. En *Revista de Estudios Sociales*, Vol. 69. Recuperado de: <https://n9.cl/p1r1c>.
- Giraldo, Jorge, Fortou, José y Gómez, María
2019. “200 años de guerra y paz en Colombia: números y rasgos estilizados”. En *Coherencia*, Vol. 16, N° 31. Recuperado de: <https://n9.cl/hv01r>.
- Gitlin, Todd
1980. *The Whole World is Watching. Mass media in the making and unmaking of the new left*. University of California Press. Berkeley.
- Goffman, Erving
1974. *Frame analysis: An essay on the organization of experience*. Harvard University Press. Cambridge.
- Hernández, Salud
2021. “Los chantajistas”. En *Semana*. Recuperado de: <https://n9.cl/hxlu5>.
- Henderson, James
2012. *Víctima de la globalización: la historia de cómo el narcotráfico destruyó la paz en Colombia*. Siglo Del Hombre Editores.
- Lacan, Jaques
1997. *Seminario 7, 1959-1960, La Ética del Psicoanálisis. Cap. IV y V*. Paidós. Buenos Aires.

- Laclau, Ernesto
2005. *La Razón Populista*. Fondo de Cultura Económica. Buenos Aires.
- Lemos, Gerardo
2021. “Colombia: Queman el Palacio de Justicia de Tuluá; el Esmad interviene en el Portal de las Américas en Bogotá”. En *CNN*. Recuperado de: <https://n9.cl/m6f0v>.
- Mejía, Oscar
2010. “Cultura política mafiosa en Colombia”. En *Ciencia Política*, Vol. 5, N° 10.
- Montoya, Ana
2008. “Niños y jóvenes en la guerra en Colombia. Aproximación a su reclutamiento y vinculación”. En *Opinión Jurídica*, Vol. 7, N°13.
- Pardo, Daniel
2021. ““El Paro Nacional nos afectó más que la pandemia”: el estallido social visto por los empresarios (y por qué creen que es una oportunidad para Colombia)”. En *BBC News*. Recuperado de: <https://n9.cl/xwntc>
- Pécaut, Daniel
2017. *En busca de la nación colombiana. Conversaciones con Alberto Valencia Gutiérrez*. Penguin Random House. España.
- Rincón, Tatiana
2010. La justicia transicional y los derechos de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario. En *Verdad, justicia y reparación: la justicia de la justicia transicional*. Editorial Universidad del Rosario. Bogotá.
- Ríos, Jerónimo
2021. “El Ejército de Liberación Nacional, el gobierno de Iván Duque y la encrucijada de la paz en Colombia”. In *Canadian Journal of Latin American and Caribbean Studies*, Vol. 46, N° 2. Recuperado de: <https://n9.cl/wik9q>.
- Rueda, María
2021. “No se puede caer”. En *El Tiempo*. Recuperado de: <https://n9.cl/aqby>.
-
- 2021a. “A Colombia nos la vistieron de represiva”. En *El Tiempo*. Recuperado de: <https://n9.cl/gg04>.
-
- 2021b. “¿Qué quiere de verdad el paro?”. En *El Tiempo*. Recuperado de: <https://n9.cl/7o3mn>.
- Tokatlian, Juan
2008. “La construcción de un “Estado fallido” en la política mundial: el caso de las relaciones entre Estados Unidos y Colombia”. En *Análisis Político*, Vol. 21, N° 64.
- Ugarriza, Juan
2012. “La dimensión política del postconflicto: discusiones conceptuales y avances empíricos”. En *Revista Colombia Internacional*, Vol. 77: 141-176.

van Dijk, Teun

1999. “El análisis crítico del discurso”. En *Anthropos*, Vol. 186.

2003. “Ideología y análisis del discurso”. En *Revista Internacional de Filosofía Iberoamericana y Teoría Social*, N° 29. Recuperado de: <https://n9.cl/tdw53>.

van Dijk, Teun & Kintsch, Walter

1983. *Strategies of Discourse Comprehension*. Academic Press. New York.

Valbuena, Juan

2021. ““Hay fallas en la autoridad y cerebro que se corrijan”: Uribe”. En *El Tiempo*. Recuperado de: <https://n9.cl/n25o8>.

Valencia, Daniel

2021. “Paro Nacional: Por qué ha salido a protestar Gustavo Petro y qué reacciones ha provocado”. En *Diario AS Colombia*. Recuperado de: <https://n9.cl/1fisv>.

Velásquez, Natalia

2005. “La Cultura Política en Colombia: Entre la violencia y la democracia, el caso de Medellín”. [Tesis de maestría], Universidad Alberto Hurtado. Recuperado de: <https://n9.cl/majhn>.

Recursos digitales

Agencia EFE

2021. “La pobreza en Colombia subió al 42,5% en 2020 impulsada por la pandemia”. Recuperado de: <https://n9.cl/lw2e4>.

Agenzia Info Salesiana (ANS)

2016. ““Niños soldado”: la llaga oculta de Colombia”. Recuperado de: <https://n9.cl/8yk0>.

Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB)

2019. Conflicto en Colombia: antecedentes históricos y actores. En *Dossier proceso de paz en Colombia*. Recuperado de: <https://n9.cl/ihqaw>.

BBC News

2021. “Reforma tributaria en Colombia: Iván Duque pide al Congreso retirar el polémico proyecto que desató fuertes protestas”. Recuperado de: <https://n9.cl/073vv>.

BLU Radio

2021. “Le he hecho más daño al establecimiento que el que le hicieron las armas: senador Gustavo Bolívar”. Recuperado de: <https://n9.cl/013ok>.

Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos

2021. “Colombia: Reportaje presenta la visión de asociaciones empresariales sobre los impactos del paro nacional”. Recuperado de: <https://n9.cl/gba4>.

El Tiempo

2021. ““La estrategia terrorista es empezar por el Pacífico”: María F. Cabal”. Recuperado de: <https://n9.cl/n9qph>.

2021a. “María Fernanda Cabal habla del Gobierno, su campaña, el paro, Uribe...”. Recuperado de: <https://n9.cl/9fsiu>.

Expreso

2021. “Gustavo Petro cree que el paro en Colombia debió terminar”. Recuperado de: <https://n9.cl/ok39o>.

Forbes

2021. “Gustavo Bolívar propone que paro nacional del 28 de abril sea indefinido”. Recuperado de: <https://n9.cl/3klm>.

2021a. ““Duque prolonga el paro para su beneficio”: Gustavo Petro”. Recuperado de: <https://n9.cl/80x8m>.

France 24

2021. “La frágil paz en Colombia: a cuatro años de la firma de los Acuerdos con las FARC”. Recuperado de: <https://n9.cl/x8gvp>.

Grupo de Memoria Histórica (GMH)

2013. ¡BASTA YA! Colombia: Memorias de guerra y dignidad. Recuperado de: <https://n9.cl/pis45>.

Infobae

2021. “El saldo del paro: van al menos 2.100 heridos y 47 muertos, según MinDefensa”. Recuperado de: <https://n9.cl/pvp4>.

KienYKe

2021. “Gustavo Bolívar: “El Congreso se comporta como lo que es: un nido de ratas””. Recuperado de: <https://n9.cl/d6sb3>.

La Libertad

2021. “María Fernanda Cabal: La izquierda le encanta proteger el desorden y la Bodega Mamerta ya no sabe qué inventar con las “FakeNews””. Recuperado de: <https://n9.cl/b1uy>.

La Nación

2021. “La protesta fue aprovechada por políticos y fuerzas oscuras”. Recuperado de: <https://n9.cl/44a8d>

Organización de las Naciones Unidas (ONU)

2020. “La cifra de desplazados en todo el mundo se dobla en apenas diez años”. Recuperado de: <https://n9.cl/5s8is>

Semana

2021. “La Asociación Colombiana de Neonatología rechaza bloqueos de vías que han causado muertes de bebés”. Recuperado de: <https://n9.cl/1ljit>.

2021a. “El desgarrador relato de una patrullera que fue abusada sexualmente por vándalos en un CAI”. Recuperado de: <https://n9.cl/zx9h2>.

2021b. “¿Cuántas empresas en Colombia han suspendido su operación por el paro nacional?”. Recuperado de: <https://n9.cl/cnp1b>.

2021c. “Colombia dejó de producir más de 560.000 barriles de petróleo por bloqueos en el paro nacional, según MinMinas”. Recuperado de: <https://n9.cl/hzhzy>.

2021d. “El Gobierno niega que haya una actitud dilatoria en sus diálogos con el Comité del Paro”. Recuperado de: <https://n9.cl/zd3g1>.

2021e. “Cali: hombres armados intimidaron a personal médico de un hospital por atención de un herido”. Recuperado de: <https://n9.cl/c40exm>.

2021f. “El mensaje de Salud Hernández-Mora a los organizadores del paro”. Recuperado de: <https://n9.cl/52frz>.

2021g. “Las órdenes de Petro para el paro: “No ir al trabajo, no hacer transacciones financieras, no comprar gaseosas””. Recuperado de: <https://n9.cl/er9a9>.

2021h. “Expresidente Álvaro Uribe pide militarizar las calles ante desmanes del paro nacional”. Recuperado de: <https://n9.cl/aazrg>.

2021i. “Uribe: “El terrorismo incendia al país, pero en el extranjero acusan al presidente””. Recuperado de: <https://n9.cl/u6ytf9>.

teleSUR

2017. “Cronología de los Diálogos de Paz”. Recuperado de: <https://n9.cl/37pyk>.

2020. “¿Cuál es el alcance de teleSUR en el mundo?”. Recuperado de: <https://n9.cl/y2w0j>.

2021. “Denuncian acciones represivas en Colombia”. Recuperado de: <https://n9.cl/19sj>.

2021a. “Denuncian represión policial en varias ciudades de Colombia”. Recuperado de: <https://n9.cl/r5ckm>.

2021b. “Continúan protestas en Colombia contra modelo neoliberal”. Recuperado de: <https://n9.cl/cw072>.

2021c. “Bogotá registra otra noche de represión por parte del Esmad”. Recuperado de: <https://n9.cl/cb6vg>.

2021d. “Reportan más de 20 agresiones sexuales a mujeres durante protestas en Colombia”. Recuperado de: <https://n9.cl/ou64>.

2021e. “Colombia atraviesa una nueva noche de violencia por parte del Esmad”. Recuperado de: <https://n9.cl/np1yv>.

2021f. “Colombianos rechazan decreto que criminaliza los bloqueos”. Recuperado de: <https://n9.cl/ky6wo>.

2021g. “Iván Cepeda denunciará a Duque ante Corte Penal Internacional”. Recuperado de: <https://n9.cl/tsrk>.

Twitter.

2021. Macías, Ernesto [@ernestomaciast]. Colombia es víctima del terrorismo urbano [...]. (10/05/2021) Twitter. Recuperado de: <https://n9.cl/le7lup>.

2021. Uribe, Álvaro [@AlvaroUribeVel]. Colombia necesita una conciencia colectiva de seguridad [...]. (28/06/2021) Recuperado de: <https://n9.cl/rw485t>.

UNICEF & Human Rights

2005. “Colombia Grupos Armados envían niños a la guerra”. Recuperado de: <https://n9.cl/n1qej>.